

Santiago, 13 de enero de 2013
N° 29/13

Honorable señor Senador
Don Hernán Larrain Fernández,
Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
Senado de la República,
VALPARAISO

Honorable señor Senador Presidente,

Me dirijo a Ud. para expresarle mi profunda preocupación ante un proyecto de ley que se estudia en la Comisión que Ud. preside, y en el cual, en líneas generales, se propondría conceder a las personas que conviven maritalmente, diversos beneficios jurídicos y económicos, como serían derechos hereditarios, derechos asistenciales de salud y alimentos, así como derechos previsionales, en alguna medida semejantes a los que tienen las personas que están unidas por el vínculo matrimonial. Estas ventajas serían concedidas no sólo a personas convivientes heterosexuales, sino también a personas del mismo sexo que conviven maritalmente.

Mi preocupación, y por qué no decirlo, mi profunda alarma, me hacen sentir la obligación de dirigirme a Ud. y, por su intermedio, a los legisladores de cuya consideración depende este asunto. Me dirijo a Ud. en mi calidad de ciudadano chileno, de católico, así como de Obispo y Cardenal de la Iglesia católica.

Me hago cargo de que existen precedentes en otras naciones, lamentables a mi juicio, que van en la línea de lo que se pretende establecer en nuestro país. Me he impuesto, como todos los ciudadanos, del intenso lobby con que las organizaciones que agrupan a personas homosexuales han presionado a las autoridades para obtener este tipo de reconocimiento y ventajas, presiones que, para quienes dependen en sus cargos del voto popular, resultan de peso cuando se postula a una elección o reelección. Tengo también presente que ha habido promesas emitidas en períodos preeleccionarios, las que condicionan actuales decisiones a título de respetar la palabra empeñada. Me han extrañado profundamente los dichos de un conocido portavoz de una organización

de personas homosexuales, en el sentido de que no habría por qué escuchar, en sede del Senado, el parecer de la Iglesia católica así como el de las comunidades cristianas evangélicas.

No considero necesario referirme ampliamente al problema de la homosexualidad, ya que la posición de la Iglesia católica es bien conocida y está oficialmente expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 2357 a 2359, texto que en fotocopia le acompaño. Me parece útil destacar algunas afirmaciones allí contenidas: "Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta (los actos homosexuales) como *depravaciones graves* (ver Génesis 19, 1-29; Romanos 1, 24-27; 1.a Corintios 6, 10; 1.a Timoteo 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que 'los actos homosexuales son *intrínsecamente desordenados*' (Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración 'Persona humana', n° 8). Son contrarios a la ley natural... No pueden recibir aprobación en ningún caso" (Catecismo de la Iglesia Católica, n° 2357). Es muy doloroso para cualquier cristiano verse ante la posibilidad de que una ley humana que, prescindiendo de la suprema ley de Dios, pudiera favorecer lo que la ley divina rechaza. Al decir lo anterior deseo recalcar que el absoluto rechazo de los actos homosexuales, no significa estigmatizar como inmoral la *tendencia* homosexual, acerca de cuyo origen no existe, hasta hoy, una certidumbre científica. Nada puede avalar una injusta discriminación con respecto a las personas con tendencia homosexual, pero nada tampoco puede justificar la concesión de un status de legitimidad y apoyo a conductas reñidas con la naturaleza humana. El vocabulario tradicional califica esas conductas con la palabra "sodomía", en recuerdo del trágico episodio de las ciudades nefandas referido en el primer libro de la Biblia.

Lo aberrante de los actos homosexuales se pone de manifiesto, con toda evidencia, al considerar el hecho irrefutable de que la intimidad genital homosexual o lesbiana, es siempre absolutamente estéril y jamás dará ni podrá dar origen a una nueva vida, objetivo específico de la función de los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. Los datos acerca de las violencias y crímenes relacionados con las conductas sexuales inmorales son un indicio del desorden que ellas revisten, así como de su negativa influencia en la convivencia humana.

No hay que hacerse ilusiones: lo que los movimientos homosexuales persiguen - y van consiguiendo en algunos lugares - es que se reconozca como totalmente legítima la actividad homosexual, que se la considere como un ejercicio respetable y que todo juicio negativo al respecto llegue a ser considerado y aún castigado como un delito, y, por supuesto, que la convivencia entre personas homosexuales tenga el mismo rango, aceptación y consideraciones que el matrimonio entre personas heterosexuales y sea considerado un verdadero y legítimo matrimonio. No descansarán hasta poder conseguirlo y harán uso para lograrlo de todo tipo de presiones psicológicas, judiciales y políticas. Y como muchos políticos cuentan cuidadosamente los votos que adquieren o pierden con cada una de sus tomas de posición, se dejarán seducir por la falacia de que el bien común coincide con lo que postula la mayoría de un electorado, e incluso por una minoría que resulte políticamente relevante.

Pero aunque el aspecto del favorecimiento de la actividad homosexual sea negativamente de gran importancia, también es preciso considerar la influencia sumamente negativa que tendría el otorgamiento de diversas ventajas - por no decir el reconocimiento social - a las uniones de tipo marital entre personas de distinto sexo.

Es muy doloroso y alarmante comprobar el hecho que desde hace decenios se ha venido socavando en muchos países y también en el nuestro, la estabilidad del vínculo matrimonial. Hace más de medio siglo que en nuestro país se introdujo el recurso de obtener nulidades civiles fraudulentas de matrimonio, como subterfugio para poder contraer "nuevas nupcias". El poco aprecio a la verdad, la mofa del carácter sagrado del juramento y la actitud complaciente de algunos magistrados hicieron posible así la introducción solapada del divorcio vincular de facto, figura entonces inexistente en la legislación chilena. Posteriormente, y con diversos argumentos especiosos, se logró introducir el divorcio vincular, novedad que fue calificada por el entonces Presidente de la República, Excmo. señor Ricardo Lagos, como un hito "histórico". Y lo fue, pero no ciertamente para el bien de la institución matrimonial, sino para dar un paso adelante en la relativización e incluso de la banalización del vínculo matrimonial. En

esa oportunidad hay que recordar con dolor que todos los honorables senadores de un partido que luce una etiqueta cristiana, apoyaron con su voto dicha infausta ley, desoyendo la palabra de los Obispos de la Iglesia Católica en dicha coyuntura. Así se consumó el desprecio de la palabra de Jesús que establece que el hombre no separe lo que Dios unió (ver Mt 19, 6; Mc 10, 9). Luego, bajo la Presidencia de la Excma. señora Michelle Bachelet, se liberalizó la distribución de la así llamada “píldora del día después”, haciéndose caso omiso de sus posibles efectos abortivos, y favoreciendo conductas sexuales irresponsables, egoístas y pecaminosas en la juventud. Dos momentos importantes de esa liberalización coincidieron, casualmente, con visitas de la Excma. señora Presidenta al Romano Pontífice, cabeza visible de la Iglesia Católica, que siempre se opuso al empleo del referido fármaco. Como consecuencia de todo lo anterior, ha habido en los últimos años un crecimiento considerable tanto de los divorcios civiles, como de personas de distinto sexo que desean convivir maritalmente pero no quieren contraer matrimonio. ¿Las causas? “¿Para qué casarme, si luego puedo divorciarme?”. “¿Para qué comprometerme de por vida, si todo puede cambiar?”. “¿Para qué hipotecar mi libertad, si un buen día se me ofrece una oportunidad mejor?”. Para la moral católica estas convivencias contradicen al sexto mandamiento de la ley de Dios y constituyen pecados de concubinato, fornicación o, peor aún, de adulterio, aunque haya personas a quienes les molesten estos calificativos, los que son sin embargo fieles expresiones de la realidad.

La verdad es liberadora y dignifica, aunque a veces por adherir a ella tengamos que “ir contra la corriente”, lo que suele traer inconvenientes, que bien vale sufrirlos con tal de dar testimonio de la verdad. La palabra castellana “testigo” es la traducción del vocablo griego “mártir”, y sabemos lo que ella significa y a lo que puede exponer. No está fuera de lugar hacer presente que son generalmente la mujer y los hijos quienes resultan más duramente golpeados y afectados por las rupturas matrimoniales.

Aunque algunos de mis razonamientos se fundan en la doctrina de la Iglesia Católica, ellos son también valederos desde el punto del derecho natural que está por encima de las legislaciones positivas dado que se

funda en la naturaleza humana que está fuera del arbitrio de los legisladores humanos. Un legislador creyente, y más aún si se profesa católico, debiera considerar lo grave e incoherente que sería apoyar con su voto una iniciativa legislativa que debilitará aún más la institución matrimonial, actualmente tan vapuleada, pero que es el fundamento insustituible de la sociedad humana. Algo que pudiera parecer a primera vista “políticamente correcto” puede ser, sin embargo, moralmente inaceptable.

Debo referirme aún a la circunstancia de que el proyecto en cuestión sería el cumplimiento de promesas hechas durante campañas electorales. Una promesa cuyo cumplimiento cause grave daño a personas, carece de validez y no obliga en conciencia. Sin pretender que haya total identidad entre ambos casos, es bueno recordar que la imprudente promesa de Herodes Antipas a una impúdica bailarina, de ningún modo lo obligaba a hacer degollar a san Juan Bautista (ver Mt 14, 8-10). El bien común de la nación tiene gran prioridad con respecto a satisfacer los deseos y presiones de personas que propugnan el reconocimiento de situaciones reñidas con la fe y la moral.

Hace unos cincuenta años, un ilustre y egregio pariente suyo, el Obispo de Talca Monseñor Manuel Larrain Errázuriz, escribió una luminosa Carta Pastoral que tituló, proféticamente, “La Crisis Moral”. Hoy día atravesamos circunstancias, no sólo parecidas a las de aquel entonces, sino ciertamente agravadas. Me permito señalar algunos aspectos de ella: el empleo de la mentira como instrumento eficaz para obtener cualquier tipo de ventajas; la falsificación y clonación de instrumentos; la violencia como medio para obtener reivindicaciones en sí mismas justificables; las licencias médicas para no acudir al trabajo, sin que las justifique un real motivo de salud; el fraude generalizado por parte de quienes utilizan los medios públicos de movilización, sin pagar la tarifa establecida; el empleo de materiales de mala calidad para las construcciones, materiales incapaces de resistir adecuadamente los desastres de la naturaleza; las variadas formas de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado; el narcotráfico y el uso de drogas y estupefacientes; el abuso del alcohol; y el libertinaje sexual promocionado por algunos medios de comunicación. Estas y quizás

algunas más, son señales inequívocas de que vivimos una verdadera crisis moral a la que urge poner remedio, sin que valga la excusa de que en otros países la situación es comparativamente peor.

El proyecto de ley que ha motivado estas reflexiones no hará sino agudizar la actual crisis que vivimos, agregándole otro ingrediente aún, y con gravísimo perjuicio del bien común nacional que no puede cifrar sus éxitos preferentemente en los logros de la macroeconomía y en muy laudables progresos sociales, los que son ciertamente importantes y dignos de aplauso y apoyo, pero que no son por sí solos suficientes para garantizar el sostenido desarrollo de las personas humanas en toda la riqueza de su ser y de su destino de eternidad, que todos deseamos y al que queremos sinceramente prestar nuestra decidida colaboración.

Aunque no pretendo asumir la representación de ninguna persona en especial, me asiste la convicción de que mis hermanos en el episcopado, así como muchos católicos se sentirían sustancialmente interpretados con lo que dejo expuesto. Estoy seguro de que nuestro común amigo, el Senador Jaime Guzmán Errázuriz (R.I.P.), habría estado de acuerdo con mis planteamientos.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle mis sentimiento de respetuosa consideración, así como para asegurarle el recuerdo ante el Señor de este viejo Obispo y S. S. affmo. en Cristo.



George A. Cardenal Medina Estévez
George A. Cardenal Medina Estévez,
Arzobispo-Obispo emérito de Valparaíso